1. **¿Tiene su país leyes u otra legislación, en cualquier nivel de gobierno, estableciendo discapacidad como un motivo prohibido de discriminación, incluyendo la denegación de ajustes razonables? Si así fuera, por favor provea referencia de la legislación y de decisiones de los tribunales haciendo cumplir esa legislación. En caso de aplicar, describa como se reflejan estas previsiones en el ejercicio de derechos específicos como educación, empleo y trabajo, salud y los restantes derechos.**

En **48** ordenamientos jurídicos nacionales, se contempla a la discapacidad como motivo prohibido de discriminación, siendo éstos:

* **1** La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
* **1** La Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
* **1** Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
* **29** Leyes estatales antidiscriminatorias, correspondientes a las entidades federativas siguientes: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas.
* **17** leyes estatales en materia de personas con discapacidad, correspondientes a las entidades federativas siguientes: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Jalisco, Estado de México, Michoacán Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán.

En **11** ordenamientos jurídicos nacionales, se contempla la denegación de ajustes razonables como motivo prohibido de discriminación, siendo éstos:

* **1** Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad.
* **1** Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
* **2** leyes estatales antidiscriminatorias, correspondientes a las entidades federativas siguientes: Nayarit y Quintana Roo.
* **8** leyes estatales en materia de personas con discapacidad, correspondientes a las entidades federativas siguientes: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Jalisco, Morelos, Veracruz, Yucatán.

En relación a decisiones de tribunales, el 9 de abril de 2016, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió una sentencia por la que se determina la existencia de la infracción relativa al uso indebido de la “pauta” por parte de un partido político durante la etapa de precampañas electorales, por la omisión de subtitular los promocionales de televisión y radio para personas con discapacidad y/o debilidad auditiva, ya que esta medida no salvaguardaba el derecho a la información política electoral de las personas.

Los partidos políticos tiene la obligación de difundir mensajes en favor de personas con algún tipo de discapacidad, ya sea visual o auditiva, en tanto que la situación de vulnerabilidad que afronta este grupo. Las medidas se deben implementar para hacer posible su inclusión plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás, es un aspecto de orden público cuya protección debe privilegiarse en la información difundida por los partidos políticos.

El fallo determinó, en términos del artículo primero constitucional, y con el fin de reconocer el déficit en materia de discriminación por discapacidad, revertir o resarcir el daño en la medida de lo posible, estableciendo medidas específicas que den el primer paso para la restauración de los derechos humanos violados. Tanto las autoridades electorales nacionales y locales, partidos políticos y candidatos independientes deberán cumplir cabal y de manera efectiva, en tiempo y forma las medidas sancionadoras, de reparación del daño y de no repetición garantizando el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad a la información, a la participación política electoral y a ejercer el voto, entre otros.

Entre los puntos resolutivos destacados se encuentran:

* Los institutos políticos tanto nacionales como locales deberán producir los promocionales con subtítulos entendiendo con ello que el audio sea congruente y coincidente con el contenido del promocional pautado y, en su caso, sustituir los spots que ya estén en poder del Instituto, con la finalidad de garantizar el derecho al acceso de información, maximizando la igualdad.
* Por tanto, en los nuevos materiales, los partidos políticos deberán privilegiar el acceso pleno a cualquier tipo de información política electoral que difundan, en beneficio de las personas con alguna discapacidad.

En relación a las políticas y estrategias para combatir la discriminación de este grupo poblacional, se realizan las siguientes acciones:

1. **Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018;** programa especial y transversal a la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, armonizado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley General sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
2. **Programa de Servicios de Atención a Población Vulnerable-Atención Rehabilitatoría Integral**; constituido por 12 programas sustantivos implementados en 21 Centros de Rehabilitación a fin de proporcionar atención rehabilitatoría extra hospitalaria integral, a población con discapacidad (mujeres, niñas, niños y adolescentes) y en riesgo potencial de presentarla, así como a sus familias, con la finalidad de favorecer su inclusión educativa, laboral y social en igualdad de oportunidades.
3. **Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras**; contempla la atención de niñas y niños de 1 a 5 años con 11 meses de edad con discapacidad, de acuerdo al numeral 3.2 Población Objetivo de las Reglas de Operación vigentes para el presente ejercicio fiscal. En este sentido, el Programa cuenta con enfoque de derechos, el cual promueve, respeta, protege y garantiza el ejercicio efectivo de los derechos humanos de las y los beneficiarios, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, brindando en todo momento un trato digno y de respeto a la población objetivo, con apego a los criterios de igualdad y no discriminación.

Para garantizar el cumplimiento de la legislación, las autoridades tienen el deber de acudir al derecho interno tanto de origen nacional como internacional, brindando la protección más amplia de la persona, ejerciendo con ello un control difuso de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio.

Esto supone un enriquecimiento de las fuentes jurídicas de garantía de los derechos humanos, y condiciona la aplicación de la norma a su mayor capacidad protectora de los derechos (de conformidad con el principio pro persona), sin generar de ninguna manera una relación jerárquica entre normas, ni asignar primacía a unas sobre otras (constitucional y de fuente internacional).

1. **¿Aplica su país medidas de acciones afirmativas para combatir la discriminación estructural contra las personas con discapacidad? Si así fuera, por favor describa el examen y sus diferentes elementos.**

El Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018 (PNDIPD); programa especial y transversal a la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, cuenta con seis objetivos y 313 líneas de acción específicos para promover el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad.

El Programa Nacional de Igualdad y No discriminación 2014-2018 (PRONAIND), programa especial y obligatorio para las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, tiene líneas de acción específicas relacionadas con los derechos de las personas con discapacidad.

1. **¿Tiene su país leyes, políticas y estrategias para combatir la discriminación de mujeres, niños y niñas con discapacidad? Por favor, describa cómo se reflejan estas políticas en su legislación y los marcos de políticas públicas**

En México se cuenta con la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, así como con 32 leyes en esta materia a nivel estatal, que si bien no se enfocan específicamente a los grupos de población antes referenciados, si lo hacen de forma general a las personas con discapacidad. Sin perjuicio de ello, cabe destacar que en el caso de las leyes de Baja California Sur, Coahuila y Michoacán, se reconocen los motivos de género y edad, como causales prohibidas para discriminar en el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.

Asimismo, se cuenta con herramientas enfocadas de manera transversal a la eliminación de la discriminación en razón de discapacidad y género:

* *La Política de inclusión laboral (PIL) para Personas con Discapacidad.* Esta política promueve múltiples acciones que favorecen el ejercicio de los derechos laborales de hombres y mujeres con discapacidad. Si bien no se refiere de manera específica a niñas y niños, es importante mencionar su importancia.

Su objetivo es diseñar una estrategia que promueva el trabajo digno para las personas con discapacidad, mediante el establecimiento de criterios y procedimientos que favorezcan la contratación, permanencia, capacitación y promoción laboral en un entorno incluyente, accesible y que fomente su desarrollo, así como la adaptación de un modelo de trabajo con acompañamiento, a las personas que lo requieran, para brindar asistencia durante el proceso de incorporación inicial al empleo.

* *Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación*. Establece los requisitos para que los centros de trabajo públicos, privados y sociales, de cualquier actividad y tamaño, integren, implementen y ejecuten dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores.

Su finalidad es fijar las bases para el reconocimiento público de los centros de trabajo que demuestran la adopción y el cumplimiento de procesos y prácticas a favor de la igualdad laboral y no discriminación. Se aplica en los centros de trabajo del sector público, privado y social, de cualquier tamaño, rama económica o giro que se encuentren ubicados en la República Mexicana.

Cuenta con 6 etapas de certificación, entre los que destaca aquellos procesos que deben considerara como eje transversal la no discriminación.

* *Resoluciones por Disposición*. Son una herramienta en la que, una vez finalizada la investigación en el procedimiento de queja, se comprueban los actos, omisiones o prácticas sociales discriminatorias y se formula la correspondiente resolución, que es vinculante, en la cual se señalan las medidas administrativas y de reparación, a fin de prevenir y eliminar la discriminación.

Entre las Resoluciones por Disposición dictadas se destaca la que se dispone la creación de un nuevo Reglamento a fin de que se acepte el ingreso de niños y niñas con discapacidad en las estancias y guarderías de los servicios de salud para los trabajadores del Estado, así como la realización de las adecuaciones necesarias para garantizar la accesibilidad.

En este sentido, destaca la publicación del “Reglamento de los Servicios de Atención para el Bienestar y Desarrollo Infantil del Instituto Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado” el cual prevé el otorgamiento de dichos servicios a niñas y niños con discapacidad, a través de Estancias Infantiles.

De igual forma, se destaca la Resolución por Disposición mediante la que se dispone la implementación de medidas que garanticen que las compañías aéreas deberán agotar todos los esfuerzos razonables para evitar la restricción, condicionamiento o negación de los servicios a cualquier persona pasajera con discapacidad. En este caso, se emitió la *Circular Obligatoria CO AV-25/12* para la observancia de la accesibilidad de las personas ocn discapacidad a las infraestructiras aeroportuarias y al servicio de transporte aéreo.

En cuanto a las políticas y estrategias se cuenta con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018 (PROIGUALDAD). Su propósito es alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, en un marco de respeto irrestricto a los derechos humanos de las mujeres y las niñas, utilizando para ello la planeación, programación y presupuestación con perspectiva de género, con el fin de contar con políticas públicas centradas en reducir las brechas de desigualdad que actualmente se observan entre mujeres y hombres.

**4. ¿Su país monitorea y colecta datos desagregados sobre discriminación contra las personas con discapacidad, incluyendo desagregación por sexo, edad y deficiencia?**

De conformidad con el artículo 46 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED), se conoce de las quejas por los presuntos actos, omisiones o prácticas discriminatorias, atribuidas a particulares, personas físicas o morales, así como a personas servidoras públicas federales, y a los poderes públicos federales, y se imponen en su caso las medidas administrativas y de reparación.

Con la reforma de la LFPED de 2014, se unificó el procedimiento de queja y reclamación en uno solo, además de que se creó un catálogo de medidas de reparación entre las que se encuentran: restitución del derecho conculcado por el acto, omisión o práctica social discriminatoria; compensación por el daño causado; amonestación pública; disculpa pública o privada y garantía de no repetición. Asimismo, se estableció que cuando se omita el cumplimiento de las resoluciones por disposición se dará vista al órgano constitucional autónomo si se trata de persona servidora pública o a la autoridad competente tratándose de particulares personas físicas o morales.

A continuación se brindan datos acerca del número de quejas relacionadas con personas con discapacidad en el periodo 2016-2016.[[1]](#footnote-1)

*Quejas calificadas como presuntos actos de discriminación por la causal de discapacidad:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | **2016** | **TOTAL** |
| **Quejas contra personas particulares** | 194 | 65 | 259 |
| **Quejas contra personas servidoras públicas federales** | 69 | 20 | 89 |
| **TOTAL** | **263** | **85** | **348** |

*Sexo de las personas peticionarias:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | | **2016** | | **TOTAL** |
| **P[[2]](#footnote-2)** | **A[[3]](#footnote-3)** | **P** | **A** |
| **Hombre** | 53 | 24 | 22 | 6 | **105** |
| **Mujer** | 41 | 11 | 15 | 5 | **72** |
| **Colectivo** | 99 | 33 | 27 | 9 | **168** |
| **Colectivo hombre** | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| **Colectivo mujer** | 0 | 1 | 1 | 0 | **2** |
| **TOTAL** | **194** | **69** | **65** | **20** | **348** |

*Sexo de las personas presuntamente agraviadas:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | | **2016** | | **TOTAL** |
| **P** | **A** | **P** | **A** |
| **Hombre** | 51 | 24 | 21 | 6 | **102** |
| **Mujer** | 42 | 12 | 16 | 5 | **75** |
| **Colectivo** | 48 | 21 | 16 | 6 | **91** |
| **Colectivo hombre** | 28 | 6 | 3 | 0 | **37** |
| **Colectivo mujer** | 25 | 6 | 9 | 3 | **43** |
| **TOTAL** | **194** | **69** | **65** | **20** | **348** |

*Causas de discapacidad en los presuntos actos de discriminación[[4]](#footnote-4):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | | **2016** | | **TOTAL** |
| **P** | **A** | **P** | **A** |
| **Auditiva** | 45 | 9 | 4 | 0 | **58** |
| **Intelectual** | 21 | 7 | 2 | 1 | **31** |
| **Lenguaje** | 1 | 0 | 3 | 1 | **5** |
| **Mental** | 24 | 10 | 11 | 4 | **49** |
| **Motriz** | 83 | 23 | 24 | 6 | **136** |
| **Múltiple** | 2 | 4 | 0 | 4 | **10** |
| **No identificada** | 45 | 9 | 13 | 1 | **68** |
| **Visual** | 12 | 10 | 8 | 3 | **33** |
| **TOTAL** | **233** | **72** | **65** | **20** | **390** |

*Ámbitos en los que se presentaron los expedientes calificados como presuntos actos de discriminación[[5]](#footnote-5):*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | | **2016** | | **TOTAL** |
| **P** | **A** | **P** | **A** |
| **Cultural, recreación y esparcimiento** | 28 | 0 | 9 | 2 | **39** |
| **Educativo** | 54 | 28 | 21 | 6 | **109** |
| **Familiar** | 5 | 0 | 1 | 0 | **6** |
| **Laboral** | 52 | 16 | 16 | 5 | **89** |
| **Medios de comunicación** | 0 | 2 | 0 | 0 | **2** |
| **Político electoral** | 0 | 2 | 0 | 1 | **3** |
| **Prestación de servicios al público** | 22 | 0 | 5 | 2 | **29** |
| **Servicios financieros y de seguros** | 16 | 0 | 4 | 0 | **20** |
| **Transportes** | 10 | 0 | 0 | 0 | **10** |
| **Vecinal** | 4 | 0 | 5 | 0 | **9** |
| **Administrativo** | 6 | 21 | 1 | 2 | **30** |
| **Salud** | 1 | 5 | 1 | 2 | **9** |
| **Otro** | 0 | 0 | 2 | 1 | **3** |
| **TOTAL** | **198** | **74** | **65** | **21** | **358** |

*Derechos vulnerados[[6]](#footnote-6):*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | | | **2016** | | **TOTAL** |
| **P** | **A** | **P** | | **A** |
| **Accesibilidad** | 71 | 10 | 22 | | 7 | **110** |
| **Asociación** | 3 | 0 | 1 | | 1 | **5** |
| **Confidencialidad de la condición de salud** | 1 | 0 | 0 | | 0 | **1** |
| **Cualquier otro análogo** | 0 | 0 | 11 | | 4 | **15** |
| **Educación** | 43 | 20 | 19 | | 6 | **88** |
| **Igualdad de oportunidades** | 0 | 48 | 11 | | 13 | **72** |
| **Integridad personal** | 8 | 7 | 4 | | 2 | **21** |
| **Prestación de Servicios al público** | 17 | 1 | 4 | | 1 | **23** |
| **Protección de la maternidad/paternidad** | 0 | 0 | 1 | | 0 | **1** |
| **Salud** | 0 | 8 | 2 | | 2 | **12** |
| **Servicios financieros y seguros** | 0 | 0 | 2 | | 0 | **2** |
| **Trabajo** | 48 | 16 | 14 | | 3 | **81** |
| **Trato digno** | 151 | 18 | 53 | | 9 | **231** |
| **Vida libre de violencia** | 33 | 8 | 12 | | 5 | **58** |
| **Vivienda** | 0 | 0 | 2 | | 0 | **2** |
| **TOTAL** | **375** | **136** | **158** | | **53** | **722** |

Entidad federativa:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2015** | | **2016** | | **TOTAL** |
| **P** | **A** | **P** | **A** |
| **Aguascalientes** | 3 | 0 | 1 | 0 | **4** |
| **Baja California** | 3 | 1 | 0 | 1 | **5** |
| **Baja California Sur** | 3 | 0 | 0 | 0 | **3** |
| **Campeche** | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| **Chiapas** | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| **Chihuahua** | 3 | 0 | 0 | 0 | **3** |
| **Ciudad de México** | 89 | 52 | 33 | 19 | **193** |
| **Coahuila** | 1 | 0 | 3 | 0 | **4** |
| **Estado de México** | 33 | 5 | 11 | 0 | **49** |
| **Guanajuato** | 9 | 0 | 1 | 0 | **10** |
| **Guerrero** | 3 | 1 | 0 | 0 | **4** |
| **Hidalgo** | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** |
| **Jalisco** | 5 | 0 | 2 | 0 | **7** |
| **Michoacán** | 2 | 1 | 2 | 0 | **5** |
| **Morelos** | 1 | 2 | 0 | 0 | **3** |
| **Nacional** | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** |
| **Nayarit** | 1 | 0 | 0 | 0 | **1** |
| **Nuevo León** | 4 | 0 | 0 | 0 | **4** |
| **Oaxaca** | 2 | 1 | 0 | 0 | **3** |
| **Puebla** | 5 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| **Querétaro** | 1 | 0 | 1 | 0 | **2** |
| **Quintana Roo** | 5 | 0 | 5 | 0 | **10** |
| **San Luis Potosí** | 4 | 0 | 2 | 0 | **6** |
| **Sinaloa** | 0 | 1 | 0 | 0 | **1** |
| **Sonora** | 6 | 0 | 0 | 0 | **6** |
| **Tamaulipas** | 2 | 0 | 1 | 0 | **3** |
| **Tlaxcala** | 0 | 0 | 1 | 0 | **1** |
| **Veracruz** | 2 | 3 | 2 | 0 | **7** |
| **Yucatán** | 5 | 0 | 0 | 0 | **5** |
| **TOTAL** | **194** | **69** | **65** | **20** | **348** |

1. Actualizado al 30 de mayo de 2016. [↑](#footnote-ref-1)
2. Personas particulares. [↑](#footnote-ref-2)
3. Personas servidoras públicas federales. [↑](#footnote-ref-3)
4. El total de causas de discapacidad no coincide con el total de expedientes calificados como Presuntos Actos de Discriminación, ya que cada expediente puede tener 1, 2 o más causas. [↑](#footnote-ref-4)
5. El total de ámbitos no coincide con el total de expedientes calificados como Presuntos Actos de Discriminación, ya que cada expediente puede tener 1, 2 o más ámbitos presentados. [↑](#footnote-ref-5)
6. El total de derechos no coincide con el total de expedientes calificados como Presuntos Actos de Discriminación, ya que cada expediente puede tener 1, 2 o más derechos vulnerados. [↑](#footnote-ref-6)